

Arturo Sosa A.

## Reflexiones sobre la coyuntura política

# Pérdida de legitimidad y Golpe de Estado

Porque estamos plenamente convencidos de que un "golpe de Estado" sería una catástrofe política en Venezuela, pues supondría un retroceso indeseable a esta forma traumática de cambio en el poder, y un obstáculo muy grande para avanzar en la democratización de las relaciones políticas, es que proponemos estas reflexiones. ¿Están dadas las condiciones para un "golpe de Estado"? ¿Se están gestando esas condiciones o sólo falta el grupo audaz que aproveche la ocasión que las condiciones favorecen? ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas Nacionales?

El que haya venezolanos que perciban este peligro es una llamada de atención que no debe pasarse simplemente por alto. Que se plantee la posibilidad como alternativa o que se juegue a él por desesperación es preocupante. Porque más vale prevenir que lamentar, es preferible advertir los signos a tiempo y ponerles remedio de manera de garantizar la democracia como única vía de discutir el ejercicio del poder en Venezuela.

### LEGITIMIDAD, DEMOCRACIA Y GOLPE DE ESTADO

Un "golpe de Estado" es posible cuando tambalea o se pone en cuestión la legitimidad del sistema político. La legitimidad política es una necesidad absoluta de aquellas sociedades que pretenden decidir sus asuntos democráticamente. Por eso, el golpe de Estado es la puntilla de cualquier sistema que tenga algo de democracia y quiera profundizar en esa forma de decidir los asuntos públicos. Por eso, un golpe de Estado en Venezuela sería una auténtica calamidad política. Sería echar por la borda los pasos dados, por pocos o chucutos que parezcan o sean, en la ruta democrática. Sería reeditar formas de conquista del ejercicio del poder propias de momentos anteriores y superados de nuestra historia política.

La legitimidad política en la que se sostiene un sistema democrático es ese sutil hilo que recorre los más diversos estratos de la sociedad y sirve de puente entre los más variados actores, grupos o intereses sociales logrando esa aceptación básica de las "reglas de juego" político. Crea, además, la posibilidad real de un nivel mínimo de negociación y concertación de intereses propia de una sociedad compleja. De esa manera, genera el apoyo difuso necesario para la existencia del sistema político, además de dar pie a los apoyos específicos de una determinada orientación, partido, gobierno, ley, política o medida que afecte al conjunto de la sociedad.

Es importante distinguir entre la legitimidad de un gobierno en ejercicio y la del sistema político en su conjunto. Si un gobierno pierde su legitimidad pero el sistema la mantiene se producirá el cambio de gobierno por las vías democráticas previstas en el sistema que sigue siendo legítimo. En cambio, si pierde legitimidad el sistema y no sólo el gobierno, se abren las puertas a cambios producidos por mecanismos como el "golpe de Estado".

La legitimidad de un sistema democrático admite grados. Entre carecer de ella y poseerla plenamente se da una gama de posibilidades. El "golpe de Estado" sólo es posible cuando el grado de legitimidad es muy bajo. Es en esos momentos cuando un grupo minoritario de la sociedad, con proyecto político o sin él, pero con la intención de asumir el ejercicio del poder político en beneficio de sus propios intereses y con la audacia necesaria para dar ese paso se lanza a darlo. Consigue poca resistencia o incluso un apoyo inicial de diversos grupos sociales que en ese momento piensan que es un "mal menor" y, a veces, llega a verse como una esperanza de cambio de una situación.

La historia reciente de América Latina asocia fácilmente "golpe de Estado" con sublevación militar. En nues-

tras sociedades contemporáneas es prácticamente imposible un golpe de Estado que no salga de las Fuerzas Armadas, o que no suponga algún grado de alianza con ellas o con un sector de ellas. Precisamente porque es un grupo minoritario quien asume el poder, tiene que sostenerlo e imponerlo por la fuerza. Y son las instituciones militares las que, en estas sociedades, garantizan ese tipo de imposición.

### LOS COSTOS SOCIALES Y LA LEGITIMIDAD

La idea de democracia nace como alternativa al modelo elitista de modernización de Venezuela. Por eso, democracia significó, desde sus comienzos, participación política en organizaciones, votaciones, etc. y participación en las condiciones de vida modernas, es decir, mejoramiento en las condiciones de vivienda, salud, educación empleo, salario...

Los partidos populistas encarnaron esta alternativa con un programa que, proponiendo el mismo horizonte económico y social, aseguraba la simultaneidad de la participación política y la distribución masiva de los beneficios socioeconómicos del proceso modernizador en marcha. Por eso, pudieron constituirse como partidos policlasistas, admitiendo en sus filas a todos aquellos sectores de la sociedad cuyos intereses no estuvieran en contradicción con los cambios requeridos para modernizar a Venezuela. Por la misma razón estos partidos podían asociar fácilmente nacionalismo y populismo: en fin de cuentas los objetivos nacionales coincidían con las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de las mayorías populares. La reforma agraria, la urbanización, el nacimiento de la industria, los servicios públicos y demás políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población y del conjunto del país sólo tenían como "opositores" a las oligarquías terratenientes y las ganancias de las Compañías Petroleras extranjeras. Los demás actores sociales obtenían beneficios, mayores o menores, pero suficientes para que pudieran formar un frente común.

El Estado rentista hacía posible que esa transición al capitalismo moderno pudiera hacerse sin conflictos de clase. Una vez que los partidos políticos populistas logran estabilizarse en el ejercicio del poder político el esquema populista llega a funcio-

nar completamente.

De esta manera, la experiencia de la gente, de las mayorías populares, y de toda la sociedad es de continuo mejoramiento. Durante varias décadas esa fue la realidad, aunque en las cifras podía verse el desequilibrio y la injusticia en la distribución de ese mejoramiento, la sensación de los diversos actores sociales era de ir mejorando y, sobretodo, la expectativa de mejorar no sólo se mantenía sino que crecía. Si utilizamos como indicador el salario real, es decir, la capacidad adquisitiva, podemos afirmar que ese proceso tuvo su pico histórico en 1979. Para ese momento se había multiplicado por 2,3 el ingreso real de una familia obrera en relación a 1944. En otras palabras, en un lapso de 35 años los venezolanos experimentamos una mejoría de dos veces y media en la capacidad adquisitiva del salario. Esos treinta y cinco años fueron, además, los de la creación de la infraestructura comunicacional, industrial y de servicios que hoy conocemos. Treinta y cinco años en que los gobiernos tuvieron esta fuente segura de legitimidad y a la que los gobiernos de los partidos populistas pudieron añadirle la vertiente de participación política, especialmente la electoral.

El crecimiento de estos años no significó desarrollo. A pesar de la mejoría señalada y experimentada, la economía venezolana no logró su despegue y hacerse autónoma, productiva, eficiente, capaz de seguir el ritmo del occidente industrializado. Al contrario se hizo cada vez más dependiente del ingreso petrolero convertido en renta estatal. Con lo cual, además de "haber perdido el tiempo", ha hecho necesarios una serie sucesiva de ajustes recesivos cuyo costo social ha sido el empobrecimiento de las grandes mayorías. En diez años se derrumbó la capacidad adquisitiva lograda en treinta y cinco. La capacidad adquisitiva del salario de una familia obrera bajó 2,8 veces en estos diez años. La pobreza crítica ha aumentado del 19 por ciento de los hogares a más del 40 por ciento. La pobreza relativa, es decir, la que se ubica por debajo del nivel normativo de consumo, abarca hoy a más de las tres cuartas partes de la población. Pudiéramos continuar con una larga lista de indicadores del empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos en salud, educación, vivienda, acceso a los servicios básicos.

Los costos sociales de lo que se ha llamado la transición del esquema

populista al del capitalismo exportador han sido muy altos para la mayoría de los venezolanos con lo cual se ha asestado un duro golpe a la "legitimidad social" del sistema político venezolano.

La reacción frente a ese deterioro de la legitimidad ha sido paradójica. Por una parte la represión policial con diversas excusas: evitar explosiones sociales como la del 27 de febrero de 1989, contener el hampa desbordada (en gran parte por la contracción señalada), controlar supuestos focos subversivos que manipulan las manifestaciones de protesta popular a cualquier nivel... Por otra, una "política social" de paños calientes, que lo más que logra es atemperar algunos de los efectos del empobrecimiento y mantener una cierta esperanza de mejora. Para los partidos sigue siendo un problema de lucha política. El deterioro de la situación social del pueblo y la política social son una trinchera de oposición o de campaña interna en el propio partido de gobierno.

Aquí tenemos, pues, una primera dimensión en la que se debilita la legitimidad del sistema. El costo social de los llamados "ajustes" afecta las propias bases de apoyo al sistema y da lugar a una situación que se convierte en "caldo de cultivo", aprovechable por actores políticos que pretenden la conquista del poder político.

### LA IDEOLOGIA LEGITIMADORA

Hemos hecho mención al nacionalismo y la democracia como la ideología sustentadora del crecimiento capitalista-modernizador, especialmente a partir de 1958. La característica ya mencionada de un Estado rentista hace que la idea de democracia esté directamente vinculada a una concepción intervencionista del Estado.

Un Estado democrático es aquel que interviene directamente en los procesos económicos y sociales para lograr un desarrollo armónico de los distintos sectores del país. Los principales expositores de este pensamiento fustigan duramente la concepción liberal del Estado, considerándola como cosa del pasado, inadaptada a las circunstancias de un país que requiere dar el salto del atraso al desarrollo.

La intervención del Estado tiene varias facetas hacia dentro y hacia afuera del país. Hacia dentro funciona como líder del proceso. Es un Estado que tiene claro el horizonte social al que debe dirigir la sociedad y se va

constituyendo con los recursos institucionales y económicos para intervenir en la sociedad en esa dirección. Es un Estado distribuidor de la renta petrolera que recibe en nombre de la nación y lo hace en función de los objetivos del desarrollo. Uno de esos objetivos es la colaboración entre las distintas clases y sectores sociales para lo cual los recursos distribuidos por el Estado son un incentivo. Esa es la garantía de una transición sin conflictos sociales.

Hacia afuera el Estado tiene que hacer crecer al máximo la renta que cobra a las Compañías Petroleras, sin romper el lazo que las une a ellas. De allí una expresión verbal muy radical por nacionalista y reivindicativa en contraste con un muy buen trato relativo en las leyes y contratos con las Compañías. Esa dimensión hacia afuera tiene una importante consecuencia hacia dentro: lo convierte en el representante de la unidad de toda la nación que reclama el mejor trato para sus recursos naturales.

El Estado democrático, hacia dentro, es el distribuidor de la renta "conquistada" a las Compañías extranjeras en nombre de la toda la nación. A través de este papel ofrece una contribución esencial a la correlación de fuerzas sociales y políticas que se gesta en el país. Siendo un Estado dominado por el modelo occidental capitalista de desarrollo, el uso de sus recursos rentistas estará en función de acelerar la implantación y crecimiento de ese modelo. De esta manera, los recursos del Estado van a favorecer, en primer lugar, aquellas actividades y grupos sociales propios de la dominación capitalista de la sociedad y él mismo se va a convertir en un inmenso productor capitalista.

Al establecerse el sistema populista de partidos, esa función no se sustituye sino que se completa con la formación de una eficaz red clientelar construida desde los partidos que abarca todos los resquicios de la sociedad.

A medida que se logra la transición de la sociedad agraria tradicional a la moderna capitalista, el esquema populista se va haciendo más costoso, pues la demanda de la red clientelar crece constantemente, y menos necesario a los grupos dominantes que han conseguido estabilidad en el ejercicio del poder. Se produce, entonces, un cambio ideológico drástico: el populismo, hasta ese momento útil como esquema, pasa a ser el culpable de los desequilibrios económicos y socia-

les existentes en la sociedad. La red clientelary no es un complemento en la estrategia de la modernización sino un desagüero de recursos necesarios para la siguiente fase del proceso económico.

Al populismo, así convertido, en la fuente de todos los males y "chivo expiatorio" para salir del atolladero, se opone una ideología que reivindica la acción de la "sociedad civil" y la "reducción del Estado". Algunos califican a esta ideología de "neo-liberal", en cuanto reivindica la vieja idea liberal de un Estado no-interventor y el equilibrio entre la oferta y la demanda, a través del mercado, como el mecanismo más eficiente de regulación social. Para quienes sostienen esta ideología, el populismo latinoamericano llevó a extremos indeseables la intervención estatal impuesta después de los años treinta por las tendencias económicas keynesianas.

En el caso de Venezuela esta ideología es una forma de encubrimiento del cambio profundo que se está dando en las relaciones de poder. El Estado sigue siendo receptor de los ingresos petroleros de los que sigue dependiendo no sólo el gasto público sino la dinámica económica del país, y su exclusivo distribuidor. Lo que cambia es, precisamente, ese modelo de distribución.

En la coyuntura presente se ha logrado "desprestigiar" al populismo. A pesar de que los partidos políticos han sido responsables de los gobiernos y políticas en las últimas tres décadas en alianza con las Fuerzas Armadas Nacionales y los sectores empresariales, aparecen ellos como los únicos responsables de las enormes deficiencias, tanto políticas como económicas y sociales del actual modelo. De esta manera se ha logrado minar las bases de la legitimidad ideológica del populismo, sin que el sustituto "neo-liberal" haya sido capaz de llenar ese vacío. Al contrario, los costos sociales tan enormes del modelo que se comienza a imponer se cargan a la cuenta de la ideología neo-liberal.

#### **LEYES QUE NO SE CUMPLEN Y UNA ÉTICA PATAS ARRIBA**

Entre los más notorios avances en la historia venezolana puede contarse la Constitución de 1961. No sólo porque su redacción estuvo a cargo de un Congreso pluralista, elegido por el pueblo, y su aprobación contó con el consenso de los más variados sectores

de la sociedad venezolana, sino porque sus disposiciones diseñan un modelo de sociedad y régimen político democrático, tendiente a la justicia social, que reconoce ampliamente los derechos humanos...

La Constitución establece la división y autonomía de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). A lo largo de estas décadas se ha venido aprobando un sistema de leyes que aplican a campos específicos del quehacer social los principios establecidos en la Constitución. Sin embargo, más de treinta años de sistema populista de partidos no sólo no han logrado que las leyes pasen del papel a la realidad social, sino que el sistema judicial venezolano funciona hoy bastante peor que antes, de manera que las leyes o no se cumplen o su aplicación depende de la vinculación con el poder. Si a esto añadimos un sistema penitenciario inhumano y una policía mediatizada por intereses parciales, el cuadro resultante es desalentador.

Lo que caracteriza a la Venezuela de hoy es la impunidad jurídica de los poderosos, la ineficacia del sistema judicial para resolver los conflictos ordinarios de una sociedad con el grado de complejidad de la venezolana. El acatamiento de la ley es una de las principales fuentes de legitimidad para un sistema democrático. En Venezuela esta fuente se está secando.

La ética en la conducta individual, social, económica y política es el fundamento de una sociedad regida por el derecho y que realice la democracia como forma ordinaria de relaciones entre las personas y los grupos sociales. Los valores proclamados por la cultura y las leyes venezolanas se contradicen cada vez más con la práctica generalizada desde los niveles más altos de la sociedad.

La corrupción se ha convertido en la cultura política dominante. Al corrupto no se le sanciona socialmente, sino que se le acepta y halaga. Las vías de la corrupción se han convertido no sólo en las más eficaces, sino en las únicas posibles para obtener desde el poder político hasta los servicios más elementales del Estado. Quien se aventura todavía a utilizar los caminos señalados por la ley o por el sentido común para ejercer sus derechos resulta incómodo a un sistema que ha convertido la aberrante corrupción en el camino ordinario para la toma de cualquier clase de decisiones.

El círculo vicioso de denuncia-impunidad del denunciado y la corrup-

ción convertida en cultura corroe lo más profundo de la legitimidad democrática y abren las puertas a todo tipo de atentado contra los más elementales derechos de las personas y de los pueblos.

#### **LA LEGITIMIDAD POLITICA**

El foco principal de legitimidad política del sistema populista de partidos ha sido la participación de todo el pueblo en la toma de decisiones a través de las votaciones. Los partidos políticos lograron identificar el ejercicio del voto con la democracia y el pueblo respondió generosamente. Si a través de la red clientelar se distribuía a la población una parte de los ingresos del Estado y se estimulaba la mejora de la calidad de vida, el voto se convirtió en una potente fuente de legitimidad política del sistema sustituto de la dictadura y primer paso en la ruta de la democracia.

En el momento actual, la desconfianza de la población hacia los partidos y la dirigencia política, junto con la insatisfacción por la situación que se vive tiende a manifestarse en forma de abstención electoral y pasividad política lo cual afecta de raíz la legitimidad del régimen.

Este fenómeno no es repentino ni responsabilidad de la ciudadanía. Los partidos se han ido convirtiendo en maquinarias electorales convirtiendo el medio en fin y separándose de las bases populares, dejando de ser expresiones de las aspiraciones de las personas y grupos sociales. Los intentos de "retrasar" las elecciones de gobernadores, alcaldes y Concejos Municipales del 92 y las manipulaciones alrededor de las elecciones del Municipio Sucre (Petare), son ejemplos recientes de esta realidad.

Si a esto añadimos un prepotente ejercicio del poder que ha hecho crecer el autoritarismo a todos los niveles del Estado, la arrogancia en relación a la sociedad civil, la arbitrariedad en la conducta de los funcionarios públicos de todos los niveles... podemos diagnosticar un deterioro grave en las fuentes de legitimidad política de nuestra democracia.

Frente a este cuadro la reacción no puede ser ni quedarse con los brazos cruzados ni dejar pasar el tiempo. La ruta de la democratización depende cada vez más del pueblo venezolano decidido a no dejarse arrastrar por esta corriente.